
	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS CARTA DE AUTORIZACIÓN						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-06	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 1

Neiva, 24 de julio de 2024

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Ciudad

La suscrita

Galíndez Gutierrez, Angela Maria, con C.C. No. 1.075.314834

Autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado titulado **Aplicación de la Ley 1878 de 2018 en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los niños presentados en el ICBF, Neiva (2018-2022)** presentado y aprobado en el año 2024 como requisito para optar al título de Especialista en Derecho Administrativo;

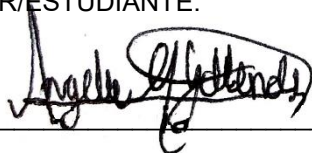
Autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que, con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

- Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales “open access” y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.
- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.
- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.






EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____



Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS					   	
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 3

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: Aplicación de la Ley 1878 de 2018 en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los niños presentados en el ICBF, Neiva (2018-2022)

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
GALÍNDEZ GUTIERREZ	ANGELA MARIA

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
TEJADA GONZALEZ	MARIO CESAR

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
LOPEZ DAZA	GERMAN ALFONSO

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

PROGRAMA O POSGRADO: ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO



CIUDAD: NEIVA **AÑO DE PRESENTACIÓN:** 2024 **NÚMERO DE PÁGINAS:** 30

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una X):

Diagramas ☒ Fotografías ☐ Grabaciones en discos ☐ Ilustraciones en general ☐ Grabados ☐
Láminas ☐ Litografías ☐ Mapas ☐ Música impresa ☐ Planos ☐ Retratos ☐ Sin ilustraciones ☐ Tablas
o Cuadros ☒

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA GESTIÓN DE BIBLIOTECAS						
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	2 de 3

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO:

PREMIO O DISTINCIÓN (*En caso de ser LAUREADAS o Meritoria*):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>
1. : <i>PARD</i> ;	1. <i>PARD</i>
2. <i>restablecimiento de derechos</i> ;	2. <i>restoration of rights</i>
3. <i>dificultades</i> ,	3. <i>difficulties</i>
4. <i>Ley 1878 de 2018</i> ;	4. <i>Law 1878 of 2018</i>
5. <i>Protección infantil</i> .	5. <i>child protection</i> .

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

Este estudio analiza los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, PARD, como conjunto de acciones y medidas implementadas desde el ICBF para garantizar, proteger y restablecer los derechos de NNA cuando estos presentan situaciones de vulnerabilidad. El objetivo radica en analizar la efectividad, dificultades y recomendaciones de los PARD en Neiva durante los años 2018 a 2022. Metodológicamente se desarrolla desde un enfoque mixto secuencial partiendo de una revisión normativa y exegética de la Ley 1878 de 2018 aunado a una revisión bibliográfica desde un mapeo sistemático, para posteriormente sistematizar estadísticamente los datos suministrados por la Dirección Regional del ICBF. Los datos demuestran que, si bien la efectividad de los PARD fue de un 90% de culminación de casos, un 10% presenta problemas: un 8% se prorroga y un 2% pasa a instancias judiciales, evidenciando desafíos en la celeridad y eficiencia del sistema centrado en los NNA. Las principales dificultades incluyen la capacidad operativa limitada, la formación insuficiente del personal y la falta de sistemas de monitoreo eficientes. Para



DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO

CÓDIGO

AP-BIB-FO-07

VERSIÓN

1

VIGENCIA

2014

PÁGINA

3 de 3

mejorar los PARD, se recomienda aumentar el personal capacitado, distribuir equitativamente los casos y establecer sistemas de monitoreo continuo. Con ello se busca asegurar la protección de los derechos de los NNA, abordando tanto los retos operativos como la necesidad de un seguimiento integral.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

This study analyzes the Administrative Processes for Restoring Rights (PARD) as a set of actions and measures implemented by the ICBF to guarantee, protect, and restore the rights of children and adolescents (NNA) in situations of vulnerability. The objective is to analyze the effectiveness, difficulties, and recommendations for PARD in Neiva from 2018 to 2022. Methodologically, it follows a sequential mixed approach starting with a normative and exegetical review of Law 1878 of 2018, along with a bibliographic review from a systematic mapping, to subsequently statistically systematize the data provided by the Regional Directorate of the ICBF. The data show that while PARD had a 90% case completion rate, 10% faced issues: 8% were extended and 2% were transferred to judicial instances, highlighting challenges in the speed and efficiency of the NNA-centered system. The main difficulties include limited operational capacity, insufficient personnel training, and lack of efficient monitoring systems. To improve PARD, it is recommended to increase trained personnel, distribute cases equitably, and establish continuous monitoring systems. These measures aim to ensure the protection of NNA rights, addressing both operational challenges and the need for comprehensive oversight.

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado: MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ

Firma:

Aplicación de la Ley 1878 de 2018 en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los niños presentados en el ICBF, Neiva (2018-2022)¹

Galíndez Gutierrez, Angela Maria²

Resumen

Este estudio analiza los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, PARD, como conjunto de acciones y medidas implementadas desde el ICBF para garantizar, proteger y restablecer los derechos de NNA cuando estos presentan situaciones de vulnerabilidad. El objetivo radica en analizar la efectividad, dificultades y recomendaciones de los PARD en Neiva durante los años 2018 a 2022. Metodológicamente se desarrolla desde un enfoque mixto secuencial partiendo de una revisión normativa y exegética de la Ley 1878 de 2018 aunado a una revisión bibliográfica desde un mapeo sistemático, para posteriormente sistematizar estadísticamente los datos suministrados por la Dirección Regional del ICBF. Los datos demuestran que, si bien la efectividad de los PARD fue de un 90% de culminación de casos, un 10% presenta problemas: un 8% se prorroga y un 2% pasa a instancias judiciales, evidenciando desafíos en la celeridad y eficiencia del sistema centrado en los NNA. Las principales dificultades incluyen la capacidad operativa limitada, la formación insuficiente del personal y la falta de sistemas de monitoreo eficientes. Para mejorar los PARD, se recomienda aumentar el personal capacitado, distribuir equitativamente los casos y establecer sistemas de monitoreo continuo. Con ello se busca asegurar la protección de los derechos de los NNA, abordando tanto los retos operativos como la necesidad de un seguimiento integral.

Palabras clave: *PARD; restablecimiento de derechos; dificultades, Ley 1878 de 2018; Protección infantil.*

¹ Artículo de Investigación

² Estudiante de especialización en Derecho Administrativo

Summary

This study analyzes the Administrative Processes for Restoring Rights (PARD) as a set of actions and measures implemented by the ICBF to guarantee, protect, and restore the rights of children and adolescents (NNA) in situations of vulnerability. The objective is to analyze the effectiveness, difficulties, and recommendations for PARD in Neiva from 2018 to 2022. Methodologically, it follows a sequential mixed approach starting with a normative and exegetical review of Law 1878 of 2018, along with a bibliographic review from a systematic mapping, to subsequently statistically systematize the data provided by the Regional Directorate of the ICBF. The data show that while PARD had a 90% case completion rate, 10% faced issues: 8% were extended and 2% were transferred to judicial instances, highlighting challenges in the speed and efficiency of the NNA-centered system. The main difficulties include limited operational capacity, insufficient personnel training, and lack of efficient monitoring systems. To improve PARD, it is recommended to increase trained personnel, distribute cases equitably, and establish continuous monitoring systems. These measures aim to ensure the protection of NNA rights, addressing both operational challenges and the need for comprehensive oversight.

Keywords: *PARD; restoration of rights; difficulties; Law 1878 of 2018; child protection.*

Introducción

El presente artículo parte de la comprensión del restablecimiento y fortalecimiento integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Neiva a partir del manejo llevado en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Estos PARD ponen en evidencia los contextos situacionales de vulneración y las directrices sobre cómo debe ser tratado y cuidado este grupo poblacional en todos los aspectos de su vida, reconociéndolo como titular de derechos desde un enfoque más amplio y completo.

Por ende, el concepto de restablecimiento va más allá de simplemente “volver al estado anterior de las cosas”, pues se enfoca en llevar a los NNA a un estado en el que pueda disfrutar y ejercer plenamente sus derechos (Deidenmark & Karlsson, 2002). La adopción de la Ley 1098 de 2016 y la Ley 1878 de 2018 en Colombia han representado un paso significativo en la protección de los derechos de NNA, en especial, esta última trajo consigo medidas específicas para el restablecimiento de derechos y el fortalecimiento de la protección integral de este grupo poblacional. Sin embargo, la efectividad de estas disposiciones en el ámbito local, como en la ciudad de Neiva, en un tema de interés e importancia para contribuir en el fortalecimiento del debido proceso y garantía de los derechos de los NNA.

El objetivo de esta investigación radica en examinar desde el marco del derecho administrativo la implementación normativa de la Ley 1878 de 2018, con el propósito de determinar la efectividad de los procesos en el restablecimiento de derechos y el fortalecimiento de la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Para ello, se analiza el periodo 2018 – 2022, examinando los posibles desafíos presentes como la falta de recursos o la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas que terminan siendo aspectos críticos que requieren atención.

Metodológicamente, el presente artículo se sustenta desde un enfoque mixto secuencial (R. Hernández et al., 2016; Sampieri, 2018) partiendo de una revisión normativa y exegética de la normativa, con una revisión bibliográfica desde una

mapeo sistemático, para posteriormente llevar a cabo una sistematización estadística de los datos suministrados por la Dirección Regional del ICBF, específicamente de los Centro Zonal de la ciudad de Neiva. La operacionalización de los datos es de forma continua y anual para visualizar estadísticamente los procesos culminados o prorrogados según los plazos establecidos por la legislación. En tal sentido, se pretende evidenciar la influencia de la Ley 1878 de 2018 en los procesos administrativos presentados en dicho periodo en la ciudad de Neiva a partir del análisis crítico de la efectividad de la legislación, identificando áreas de mejora y destacando la importancia de abordar los desafíos persistentes.

1. La Ley 1878 de 2018 respecto a los procesos administrativos de Restablecimiento de Derechos

1.1. Contextualización

La protección de los NNA en cualquier marco normativo representa un pilar fundamental para la estructuración de la sociedad, y por eso, la Carta Política presenta suma atención a la importancia de este grupo etario y su composición en familia. De tal manera, los marcos normativos diseñados para esta población están encaminados a generar una regla protección, atención y prevención de daños o mengua a sus derechos fundamentales, entendiendo siempre que son los NNA un cimiento fundamental en la construcción de cualquier sociedad (Deidenmark & Karlsson, 2002). Aunque, una revisión desde investigaciones precedentes permite concluir que, en muchos contextos, estos derechos llegan a verse vulnerados debido a diversas circunstancias, como la violencia, el abandono, la explotación y otras formas de desprotección (De Avila & Arcón, 2022; Villamizar Jaraba et al., 2020).

Por tanto, y siguiendo la línea de Sierra y Gûiza, (2020) y Acosta Gonzalez, (2023) quienes aportaron importantes consideraciones al restablecimiento de derechos desde el proceso administrativo, es posible argüir la protección y salvaguarda de estos derechos se convierte en una tarea primordial para asegurar que los NNA puedan crecer en ambientes seguros y propicios para su desarrollo

físico, emocional y cognitivo. Es justo en ese marco de necesidad y proyección que se configuran las herramientas normativas de protección, como lo es la Ley 1098 de 2006, que Estableció principios como la primacía de sus derechos, la corresponsabilidad en su protección y la garantía de su participación activa en la sociedad.

Es así como desde la Ley 1098, o Código de Infancia y Adolescencia se pudo concretar esos derechos fundamentales establecido en la Carta Política, aportando así un instrumento que permitiera gozar de derechos a los NNA en diversos ámbitos, como la familia, la educación, la salud, la participación, la protección y la responsabilidad penal, junto con mecanismos para su protección, como el Sistema de Protección Integral, con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por tanto, esta ha sido fundamental para el avance de los derechos de NNA en Colombia. Sin embargo, como plantean diferentes autor, persisten desafíos para su plena implementación en el país, como la violencia contra los niños, pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, donde las instituciones deben ser mucho más fuertes para contrarrestar estos yerros.

Cabe señalar que, estas dificultades también son dinámicas, cambiantes, y heterogéneas, por lo que las normas que las regulan y tratan de mitigar también deben ajustarse a las realidades sociales en que se enmarcan. Es en este contexto que la Ley 1878 de 2018, como modificación legislativa clave, permite una adecuación en el ámbito del restablecimiento de derechos de los NNA en Colombia. Su objetivo recae en fortalecer los mecanismos de protección infantil, y así mejorar las disposiciones específicas para garantizar la pronta intervención y atención en casos donde se encuentren vulnerados los derechos de los NNA.

1.2. Antecedentes

Como plantea Valencia y Espinosa, (2023) en su Estado del Arte sobre algunas repercusiones de la normativa jurídica en la protección de NNA, se observan serias deficiencias en la protección de estos derechos. Es así como la Ley

1878 de 2018 buscó zanjar estos problemas y vacíos para asegurar una mejor protección a este grupo poblacional. Dicha Ley pasó por una serie de investigaciones previas y estudios de caso que dieron luz sobre las diferentes consecuencias que traían estos vacíos y aspectos no regulados en debida forma. Desde la revisión sistemática contemplada en Forero Rengifo, (2023) se halla los siguientes antecedentes por los cuales se requería la modificación y ajuste de la Ley 1098 de 2006.

En primera medida, se halla una deficiencia en la atención del ICBF como mecanismos e institución principal en la protección de derechos de los infantes y adolescentes. Se observa según la autora una serie de denuncias y casos de negligencia, incluidos el maltrato por parte del instituto, en medio de la atención a los NNA. Sumado a esto, se presentaban procesos largos y en muchas ocasiones revictimizantes de los NNA, dado que los procesos administrativos de restablecimiento de derechos eran lentos, burocráticos y recalcitrantes en señalar al NNA sin procesos de acompañamiento, que al final lo generaba una mayor vulnerabilidad para los menores, estando estos en una situación de desprotección.

Por otra parte, señalan algunos autores la ausencia de enfoque realmente restaurativo, dado que el sistema estaba centrado en la sanción a los reprochables de las vulneraciones y menguas de derecho, pero no en la priorización de la reparación del daño que el NNA había sufrido, ni la restauración de esos derechos menguados, perpetuando aún más si situación manifiesta de vulnerabilidad (González, 2021). Se hacía por tanto necesario una nueva mirada de este proceso, centrado no en el castigo, sino en la restauración, protección y prevención del menor vulnerado (Cardona Romero, 2022).

Bajo esa misma línea de análisis, otro de los problemas vistos en la Ley 1098 de 2006 era su ausencia o inadecuada participación de NNA dentro de los procesos, dado que no eran suficientemente escuchados ni tenidos en cuenta en la toma de las decisiones que los afectaban, generando así problemas en la reparación o restablecimientos de derechos. Por último, también se precisaba de mayor atención

a las entidades en cuanto a los recursos necesarios para funcionar, puesto que estas nos contaban con estos recursos y capacidades suficientes para cumplir con estas funciones.

En respuesta a estas problemáticas, la Ley 1878 de 2018 propuso algunas reformas al sistema de protección de la infancia en Colombia, con el objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos de los NNA. Entre estas se destaca el enfoque restaurativo, con una priorización de la reparación del daño y la restauración de los derechos de los NNA, por encima de la sanción a los responsables (A. C. Hernández, 2021). Sumado también a la implementación de procesos administrativos teóricamente más rápidos y eficientes para el restablecimiento de derechos con un reconocimiento de los NNA como sujetos con capacidad de ser escuchados y tenidos en cuenta en las decisiones que les afectan (Barrios Zabaleta et al., 2020). En definitiva, ha sido un avance importante en la protección de los derechos de la infancia, pero con desafíos persistentes para su plena implementación y efectividad, lo que requiere un compromiso continuo por parte del Estado y la sociedad para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de todos los actores objetivo de estos marcos normativos.

1.3. Sobre el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos PARD

En el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos -PARD- se entiende como un mecanismo establecido para garantizar el restablecimiento pleno y efectivo de los derechos de los NNA que han sido vulnerados. Si bien la norma no determina de manera específica un apartado conceptual para referirse a esto, existe una aplicación tangible que permite establecer una serie de pasos concretos, sumados a otros estudios que señalan este proceso. Así, autores como Sierra y Gûiza, (2020) exponen al respecto del PARD que este:

(...) se materializó el mandato constitucional contenido en los artículos 44 y 45, de garantía y protección de sus derechos desarrollados en la Ley de Infancia y

Adolescencia (...). La Ley de Infancia y Adolescencia encomendó la verificación de estos derechos al ICBF, ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), en cabeza de los defensores de familia, como autoridades administrativas que, dentro de la estructura de la entidad, corresponden a dependencias de la institución y cumplen con la misión de esta (p. 14-15).

Siendo así, un PARD se iniciaría o encontraría su punto primario dentro de alguna de las entidades especializadas para recibir los casos, tales como el Defensor de Familia, como autoridad competente en la mayoría de los casos, pero a su vez existe la Comisaría de Familia en casos de VIF o cuando no se cuente con el Defensor de Familia. De igual manera, esta misma lógica se traslada a los Inspectores de Policía que también pueden recibir este tipo de denuncias o alertar sobre un PARD.

Una vez recibida la notificación inicial y advertencia sobre una posible vulneración de derecho, se desarrolla en unas etapas generales y con ello, se inicia justamente con la notificación o intervención inicial, en la cual se informa a los presunto responsables de la vulneración y se procede a realizar lo que serían las primeras acciones dispuestas a proteger los derechos menguados a los NNA (Sarmiento Morales, 2020). Al ser recepcionados se abre una investigación desde el entramado y marco administrativo, en el cual se recopilan las pruebas conducentes a determinar justamente la afectación o vulneración, en conjunto con entrevistas a las partes involucradas. Así, una vez recabadas las mismas se continúa con una formulación de un plan individualizado para el restablecimiento de estos derechos, definiendo con ello los pasos a seguir de manera específica para restaurar estos derechos, con la participación de los NNA y otros actores relevantes.

Se procedería, una vez involucrados los actores relevantes y con pruebas correspondientes, a la ejecución y seguimiento del plan individualizado para el restablecimiento de derechos, con un seguimiento periódico para evaluar su real efectividad y proceder, según los resultados obtenidos, con el cierre del proceso, siempre que se haya logrado el restablecimiento de los derechos de los NNA. Es así

como siguiendo este marco normativo se establecen unos principios sobre los cuales se desarrolla el PARD tal como:

Tabla 1.

Principios del PARD

Principio	Descripción
Primacía del Interés Superior del Niño	Las decisiones deben tomarse siempre en beneficio del NNA, lo que implica que se escinde de un proceso sobre el cual se busque el castigo del sujeto activo.
Respeto por los Derechos del Niño	Se deben garantizar todos los derechos reconocidos en la Ley 1098 de 2006 y la Convención sobre los Derechos del Niño, desde un enfoque integral de cuidado y protección
Enfoque Restaurativo	Como se ha mencionado, se pretende reparar el daño causado al NNA y restaurar sus derechos, en lugar de solo sancionar a los responsables, sin que estos deje de ser también importante.
Participación del Niño	El NNA debe ser escuchado y tener la oportunidad de participar en las decisiones que le afectan, relacionándolo y haciéndolo parte efectiva e importante del proceso.
Corresponsabilidad	Todos los actores involucrados tienen la responsabilidad de proteger los derechos del NNA, lo cual sugiere que el PARD es integral con una organización horizontal entre sus entidades.

Nota: Información tomada y ajustade de Ley 1878 de 2018 (Valencia y Espinosa, 2023).

El PARD tendría el siguiente desarrollo específico: primero la verificación de la garantía de derechos de los NNA, a realizarse de manera inmediata después de tener conocimiento de la vulneración, lo cual implica que su ejecución inicial debe ser expedita. Sin embargo, si el NNA no está presente, esta deberá hacerse en la mayor brevedad posible, no siendo esta mayor a diez (10) días siguientes al conocimiento de vulneración inicial y se configura la necesidad de inmediatez en esta etapa. Seguidamente, se emite el informe, donde los profesionales del equipo técnico interdisciplinario aportan una revisión detallada de la verificación realizada, y así proceder con la apertura del proceso, y se emite el auto de este. Se tendrán cinco (5) días para el pronunciamiento después de ser notificado a las partes, para

que aporten pruebas de ser necesario, según el art. 4 de la Ley 1878 de 2018 modificadorio del art. 100 de la Ley 1098 de 2006.

En la etapa de práctica de pruebas, las mismas son llevadas a cabo para establecer y esclarecer los hechos, incluyendo la entrevista al NNA y la citación de las partes involucradas. Para ello se dispone según el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018, de cinco (5) días siguientes a la notificación del auto de apertura. Bajo ese marco normativo y procesal, la autoridad administrativa debe resolver la petición de restablecimiento de derechos dentro de los diez (10) días siguientes a la práctica de pruebas anteriormente enunciada. Con ello, si se determina que es un asunto susceptible de conciliación, se procederá con el trámite conforme a la ley 2220 de 2022 en el caso actual. Sin embargo, si la conciliación falla o se configura, se fijarán obligaciones provisionales mediante resolución motivada.

A este punto, se llega a una etapa de recursos y homologación, en la que el fallo emitido por la autoridad administrativa será susceptible de recurso de reposición a resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su interposición. Posteriormente, el expediente es remitido a la autoridad judicial para homologar el fallo, en el cual el juez tendrá un plazo de veinte (20) días para resolver, según el art. 6 de la Ley 1878 de 2018, modificadorio del art. 103 de la Ley 1098 de 2006 respecto al carácter transitorio de las medidas de restablecimiento de derechos y de la declaratoria de vulneración. Frente al seguimiento del proceso, la autoridad administrativa realizará el seguimiento al proceso durante un tiempo máximo de dieciocho (18) meses, para evaluar que se hubiere reestablecido y recobrado el goce de los derechos vulnerados al NNA. Se acota que en casos excepcionales existe una prórroga de seis (6), respetando siempre el tiempo máximo de (18) meses. De igual manera, el art. 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el art. 4 de la Ley 1878 de 2018, plantea que, si la autoridad administrativa no resuelve en el tiempo establecido, el expediente se remite al juez de familia para que tome una decisión final en un plazo máximo de dos (2) meses.

Finalmente, la Ley 1878 de 2018 presenta otros aspectos administrativos, como la definición de plazos y procedimientos para la declaración de adoptabilidad o vulneración de derechos, así como para la solicitud y otorgamiento de permisos de salida del país para menores. Sumado a eso, la Ley objeto de análisis propone una serie de reglas especiales de procedimiento en los casos de adopción, en relación con sus plazos para traslados, junto con las notificaciones de sentencia, sumado a lineamientos de seguridad social para garantizar derechos para los adoptantes y adoptivos.

2. Análisis de los PARD de los NNA presentados en el ICBF seccional Neiva en el año 2022

2.1. Sobre los PARD en Neiva

Desde la revisión sistemática y la información proporcionada por las entidades del ICBF encargadas de la protección y salvaguarda de los NNA, se obtiene un conjunto de información y datos importantes para comprender la oportuna atención brindada o, por el contrario, la existencia de problemas administrativos y procesales para el restablecimiento de derechos. Es así como desde esta revisión es posible determinar la sistematicidad, periodicidad y procesos desplegados en Neiva, Huila, durante los últimos años, especialmente el 2022.

El capítulo inmediatamente anterior ofrece una mirada teórica y analítica de los postulados contenidos en las normativas 1098 de 2006 y 1878 de 2018, en términos generales. De ahí que, la información recaba es posible determinar la competencia y las autoridades responsables en sujeción a los postulados de la Ley 1098 de 2006 y 1878 de 2018, así como la identificación de los procedimientos y trámites que se adelantan y con qué grupo o equipo especializado e interdisciplinar se cuenta (Hernández, 2021).

2.2. Sobre la competencia y autoridades responsables

En Neiva, según la información suministrada, el ICBF se presenta como la entidad encargada de supervisar y vigilar los PARD, funcionando a través de dos

centros para ello: cuenta con un centro zonal en Neiva y un centro zonal en La Gaitana. Desde este enfoque, los dos centros se encargarían de atender las necesidades de protección y de restablecimiento de derechos a los NNA que hayan sido afectados o vulnerados.

Sin embargo, desde el informe técnico de la gobernación del Huila del 2022-2023 se observa una cantidad importante de casos de maltrato infantil, entre otras vulneraciones de derechos a los NNA. El análisis del indicador de tasa de maltrato infantil se calcula mediante el número de casos notificados al SIVIGILA en menores de 18 años, dividido por la población menor a 18 años, consolidado a su vez en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16 vinculado con Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En tal sentido, es importante resaltar que el comportamiento revela un preocupante aumento progresivo en la serie temporal analizada desde 2012 hasta 2022. Se ha alcanzado una tasa de 830 casos por cada 100.000 menores de 18 años en 2022, con una mayor incidencia de vulneraciones en el género femenino. Asimismo, el informe permite evidenciar que existe un número heterogéneo de casos en relación con su tipicidad, abarcando diferentes formas de maltrato, siendo la violencia por negligencia y abandono la más presente.

El análisis técnico permite inferir desde esta entidad que, por el número de casos crecientes, podría no ser suficiente el nivel de cobertura del sistema en general, haciendo que los PARD pudieran ser más ineficaces. Se obtiene en total que se distribuyen dieciocho (18) defensorías entre los dos centros zonales, ubicando nueve (9) en cada uno de estos centros, las cuales desempeñan la función de atención y protección a los casos reportados de manera inicial. En ese orden, según la información aportada, se tienen por cada defensoría un equipo conformado por un (1) defensor de familia, un (1) psicólogo, un (1) trabajador social y un (1) nutricionista. Pero no se suministra información sobre necesarios para desplegar PARD de manera eficiente.

Asimismo, y siguiendo los lineamientos de los PARD en cuanto a su trámite, requiere que las defensorías y entidades adscritas desplieguen las diligencias de manera secuencial respetando estas etapas. La observancia de la información recabada no permite establecer, de manera clara, la existencia o no de alteraciones dentro de los tramites normativamente estipulados para estos efectos de restablecimiento de derechos.

2.3. Cantidad de casos recibidos según información aportada

Desde los datos aportados por el ICBF seccional Neiva, Huila, permite observar la cantidad de procesos manejados de manera anual por las defensorías de familia, tanto en Neiva como La Gaitana, con un espacio temporal desde 2018 a 2022. Desde estos datos es posible hacer un análisis específico al último año en relación con la cantidad de datos presentes de manera previa. Los datos se presentan desglosados por centro zonal y defensoría de familia, y muestran la cantidad de procesos gestionados año a año.

Tabla 2.

Distribución de casos por defensoría en centro zonal Neiva

Defensoría Familia	2018	2019	2020	2021	2022
Primera	9	12	8	6	19
Segunda	48	38	11	16	23
Tercera	131	34	6	15	19
Cuarta	70	26	10	31	12
Quinta	43	17	8	10	15
Sexta	189	55	17	37	24
Séptima	23	1	5	7	3
Octava	55	62	47	20	25
Novena	N/A	2	8	14	16
Total	568	247	120	156	156

Nota: Datos proporcionados por ICBF (2018-2022), Neiva – Huila.

Desde la Tabla 2 se observa la distribución de casos presentados en las diferentes defensorías en el centro zonal de Neiva, discriminadas año a año y su evolución en el tiempo. Se determina algunos aspectos clave: (i) La defensoría con mayor casos es la 6ta, seguida por la 3ra y 4ta, pero con una notable variabilidad entre cada año y cada defensoría, con fluctuaciones en la carga de trabajo para cada una de estas. Ahora, se presenta que la defensoría 7ma, pese a la variabilidad, presenta el menor número de casos.

Tabla 3.

Distribución de casos por defensoría en centro zonal La Gaitana

Defensoría Familia	2018	2019	2020	2021	2022
Primera	30	17	8	12	10
Segunda	3	3	5	7	4
Tercera	30	10	16	7	9
Cuarta	23	6	5	6	9
Quinta	121	8	2	0	4
Sexta	109	16	7	6	12
Séptima	11	36	5	9	17
Octava	177	74	2	32	27
Novena	2	137	6	9	22
Total	506	307	56	88	114

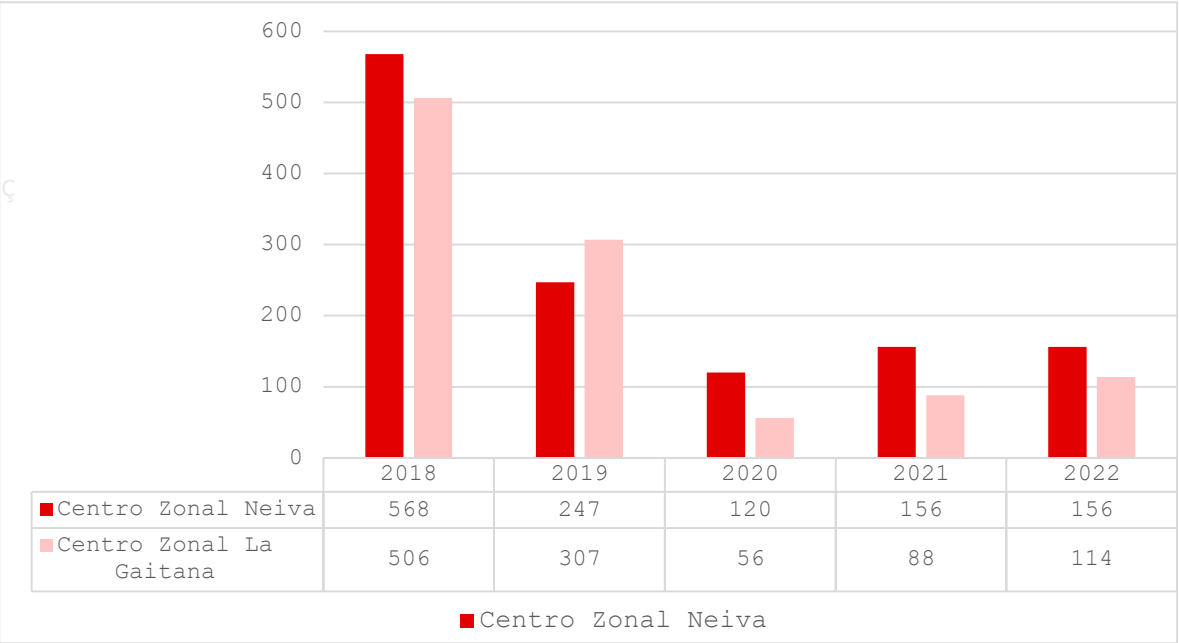
Nota: Datos proporcionados por ICBF (2018-2022), Neiva – Huila.

La interpretación de la Tabla 3 permite establecer que la defensoría con mayor cantidad de casos entre 2018 a 2022 es la 8va, seguida por la 5ta y 6ta, pero al igual que en el centro zonal Neiva, el centro zonal La Gaita es igualmente variable, con fluctuaciones considerables año a año. En efecto, se presenta un aumento significativo en la cantidad de casos 2018 a 2019 en la defensoría 9na, permaneciendo estable en los siguientes años en ese número de casos. De igual manera, aunque no son cambios notables, la defensoría 5ta presentó una disminución diferente entre los años 2018 a 2019, permaneciendo con números más bajos.

Ahora bien, es posible contrastar los datos totales de año a año entre ambos centros zonales, representando la cantidad total por los centros Neiva y La Gaitana en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Esto permite evidenciar de manera visible la dinámica general y comportamiento de los datos.

Figura 1.

Comparación por número de casos año a año entre centro zonales



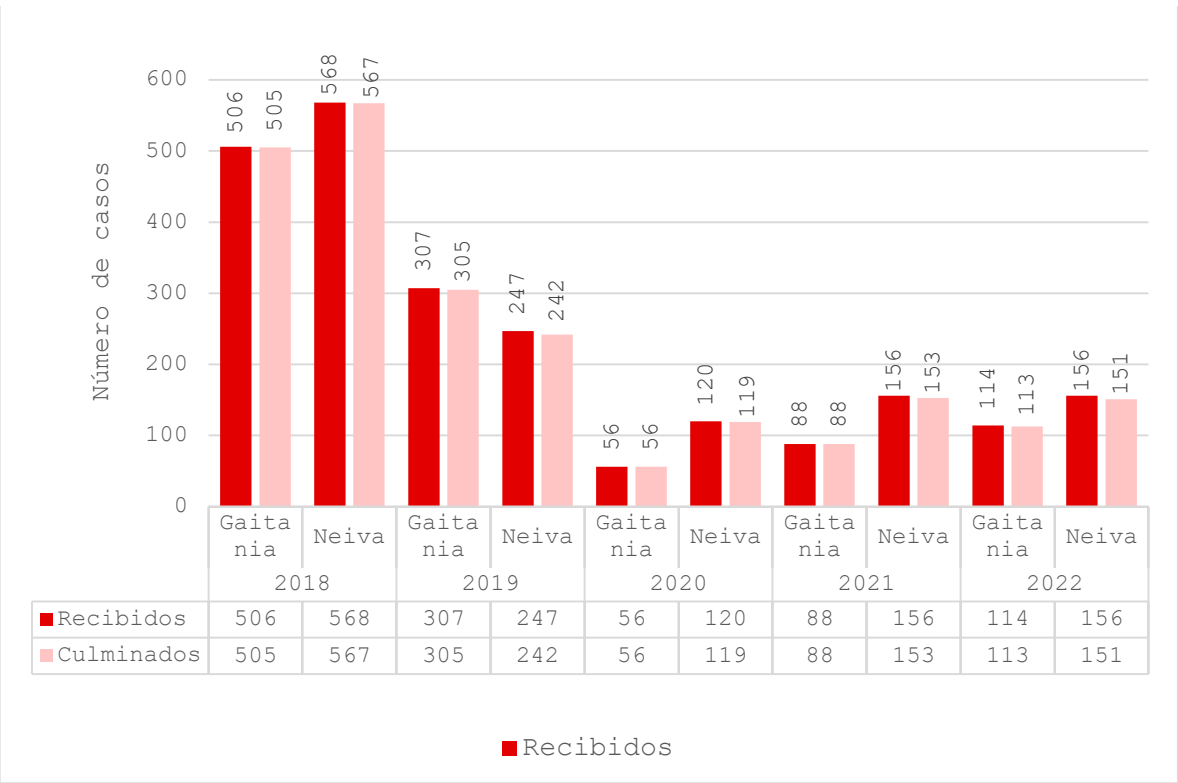
Nota: Comparación de datos totales año a año entre el centro zonal Neiva y el Centro zonal La Gaitana.

Según los datos el Centro Zonal Neiva manejó más casos comparado con el Centro Zonal La Gaitana en todos los años, salvo el 2019, con ambos centros zonales manteniendo una disminución en la cantidad de casos de 2018 a 2020, pero con una ligera disminución en el Centro Zonal Neiva y una disminución más pronunciada en el Centro Zonal La Gaitana (Ver Figura 1). Entre los años 2021 y 2022, ambos centros zonales manifestaron una mayor cantidad de PARD en comparación con el año anterior, aunque la magnitud del aumento tuvo variaciones entre los dos centros. Por tanto, el Centro Zonal Neiva tuvo un aumento más significativo en comparación con el Centro Zonal La Gaitana. Sin embargo, pese a las fluctuaciones en la cantidad de casos de un año a otro, ambos centros zonales

experimentaron una tendencia general hacia la disminución en la cantidad de casos en todos los años, pero un aumento en los últimos dos periodos.

Ahora, al revisar la dinámica de casos de los PARD en consonancia con la cantidad de procesos culminados a término según la Ley 1878 de 2018 y los lineamientos de la Ley 1098 de 2006, se obtiene los valores de los procesos culminados a término según la normativa.

Figura 2.
Número de casos recibidos y culminados a término entre los centros zonales



Nota: Número de casos presentados por año, comparando ambos centros zonales en cuanto a caos recibidos y resueltos o culminados en el término de la Ley 1878 de 2018.

Se compilan las dinámicas de distribución de casos a lo largo de cinco (5) años, observándose una tendencia a la baja significativa los primeros años, y con cierto establecimiento de casos por año en los siguientes años (Ver Figura 2). Sin embargo, se resalta el número de casos que pudieron culminarse en cada centro zonal durante cada año, tal que para el año 2018 se presentó en Neiva y La Gaitana una alta eficiencia en cuanto a la resolución de estos casos, dado que solo durante

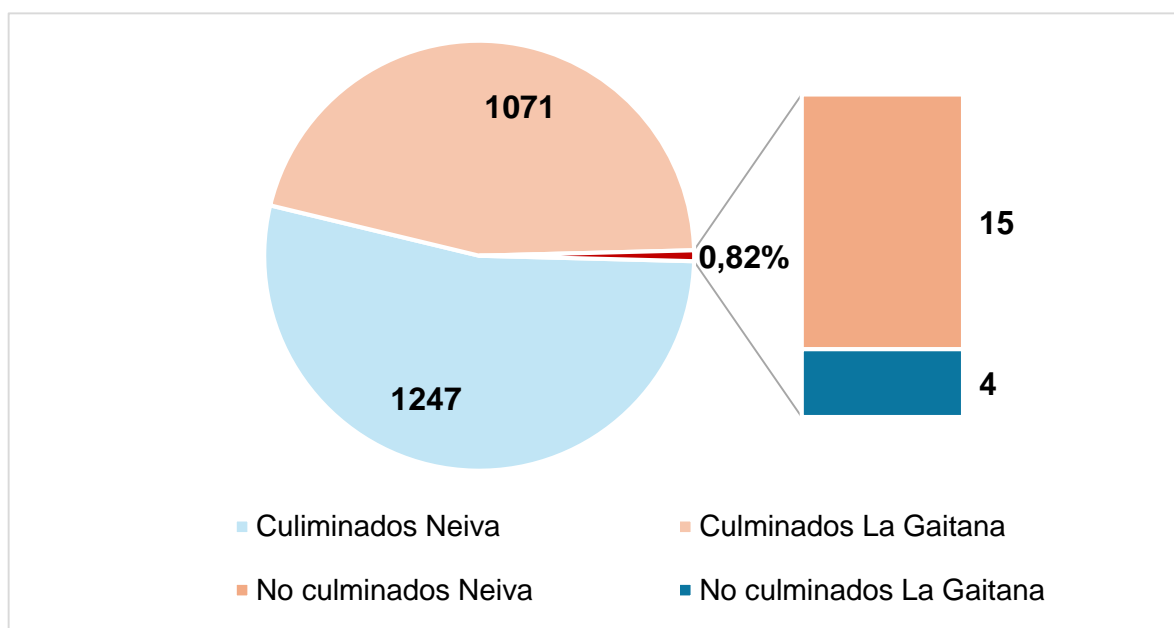
el 2018 hubo un (1) caso en cada Centro Zonal sin resolver, lo que implica que durante ese periodo solo dos (2) casos superaron los tiempos para culminarlos.

Para el 2019, Neiva presentó un aumento en sus casos sin culminar, llegando a (5) PARD sin ser resueltos, versus los dos (2) casos sin culminación en La Gaitana. En el 2020 La Gaitana no tuvo casos sin culminar y Neiva solo presentó un (1) caso. 2021 tuvo un balance similar con solo (3) casos en Neiva y ninguno en La Gaitana. No obstante, en el 2022, como último año con datos presentes, tuvo un incremento en los procesos sin culminación efectiva en términos normativos, ya que Neiva tuvo de nuevo (5) casos y La Gaitana (1).

Los datos en general reflejan un total de 2318 casos, repartidos en 1247 en Neiva y 1071 en La Gaitana, teniendo así una distribución ligeramente más abultada en el Centro Zonal de Neiva, teniendo 19 casos no resueltos en cinco (5) años o un 0,82% de casos no culminados a término.

Figura 3.

Número total de casos recibidos y culminados por Centro Zonal

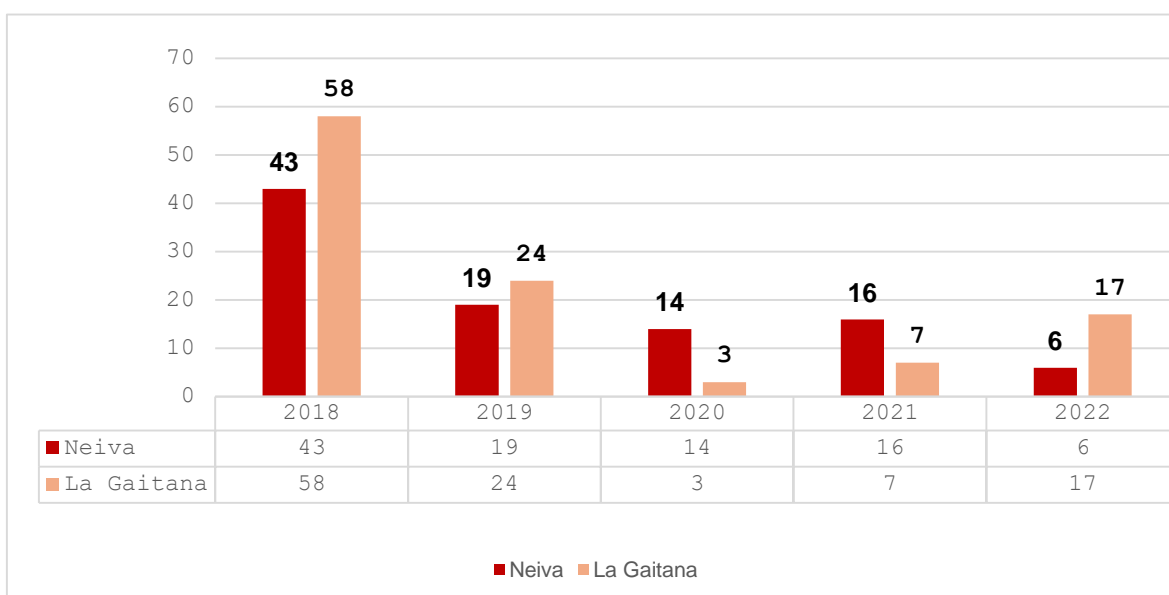


Nota: Datos totales de PARD llevados a cabo durante 2018-2022 discriminados por casos recibidos y culminados según tiempos escalecidos por la Ley 1878 de 2018.

Ahora bien, los datos aportados por ICBF también permiten observar el número de casos prorrogados durante los mismos años de 2018-2022, estableciendo así de manera directa los casos que tuvieron que ser ampliados en sus plazos. De tal forma, los datos aportados por la entidad reflejan que el número de casos prorrogados es más representativo que el número de casos que no llegaron a término dentro de los tiempos establecidos (Ver Figura 4).

Figura 4

Número de casos prorrogados por cada Centro Zonal 2018 - 2022



Nota: Datos obtenidos del ICBF en que se observa el total de casos que tuvieron que ser prorrogados según los lineamientos de la Ley 1878 de 2018, discriminados por año y seccional.

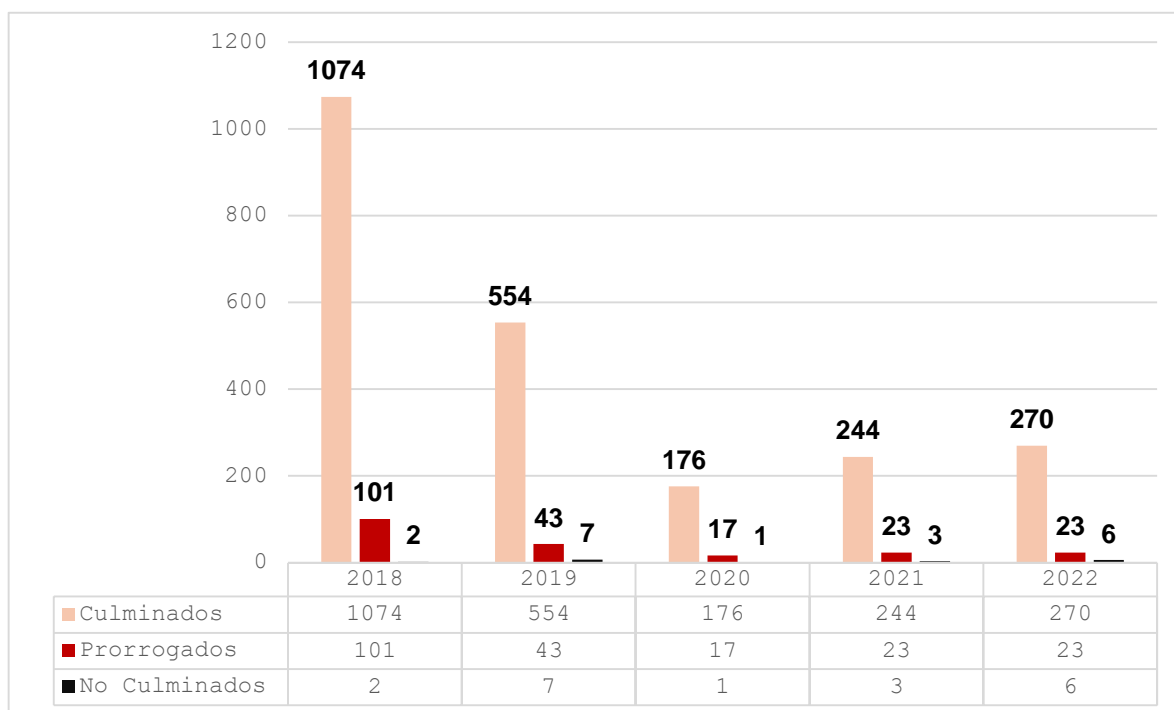
La Figura 4 permite evidencia que durante el 2018 la cantidad de casos que tuvieron que ser prorrogados fue considerablemente mayor a los años subsiguientes, con 43 y 58 casos Neiva y La Gaitana, respectivamente. No se observa tampoco un año en el cual no haya necesitado de la prórroga, implicando esto que en muchos casos no es posible culminar el seguimiento al albor de lo estipulado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018, modificadorio del art. 103 de la Ley 1098 de 2006, tal que el mismo señala que:

En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado (Congreso de la República, Ley 1878 de 2018, art. 6).

Tal que así, puede detallarse de manera compilada las tres categorías de análisis para los cinco (5) años, haciendo visible la cantidad de PARD culminados, prorrogados y no culminados, según Ley 1878 de 2018 (Ver Figura 5).

Figura 5.

Comparativo general de PARD culminados, prorrogados y no culminados



Nota: Se relaciona según los datos proporcionados por ICBF la totalidad de PARD recibidos, prorrogados y no culminados desde el 2018 a 2022.

La Figura 5, por tanto, permite ver la dinámica de PARD compilada en los dos centros zonales agrupados por año, dejando ver que para el 2022, siendo este un año con menos números de casos en relación con 2018 y 2019, tuvo una mayor cantidad de PARD sin culminar, solo superado por el 2019, aunque este con más

casos. De tal forma, en el 2022 el porcentaje de casos que no se culminaban en los términos de la Ley 1878 de 2018 llegó a cerca del 2%, en contraste con el 1,4% de casos no culminados presentados en 2019.

Los casos prorrogados oscilaron de manera constante entre el 7% y 8% en todos los años, y completando así un 89% de casos culminados en todas las defensorías de ambos Centros Zonales. En suma, existe una tendencia a mayor número de casos no culminados y prorrogados en los últimos años, con porcentajes iguales o superiores a los presentados en 2018 y 2019, aunque estos tuvieron un mayor volumen de PARD en todas las defensorías.

3. Efectividad, dificultades y recomendaciones frente a los PARD en Neiva durante los años 2018 a 2022

Como se ha venido planteando a lo largo de este artículo, y como propone Barrios Zabaleta et al., (2020), los PARD cumplen una función esencial en la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de los NNA que han pasado por situaciones de vulnerabilidad y afectaciones. La Ley 1098 estipuló unos lineamientos generales para la protección y la Ley 1878 propuso una serie de estrategias y tiempos para que los PARD fuesen más efectivos en la protección de los NNA. Es así como desde los datos recabados, el análisis jurídico, y la revisión bibliográfica, se concibe el siguiente análisis sobre (i) la efectividad, (ii) posibles dificultades y (iii) recomendaciones para mejorar los PARD.

3.1. Sobre la efectividad de los PARD en Neiva

Los PARD están diseñados para asegurar que los derechos de los menores sean protegidos y reestablecidos al albor de la Ley 1878 de 2018, siendo estos prevalentes y fundamentales para el ICBF y todo el sistema de protección. Por tanto, salta a la vista que, aunque se presente un porcentaje de culminación cercano al 90%, exista otro 10% que no se está ajustando al objetivo de la Ley.

Se tiene así que ese 10% restante aproximado representaría un 8% de casos que tuvieron que ser prorrogados, esto es, que no pudieron ser culminados en el

tiempo inicial. Y representa otro 2% de casos que no pudieron ser culminados y debieron pasar a la Rama Judicial para llegar al restablecimiento completo de estos derechos. Si bien es cierto que el porcentaje de culminación es amplio, al tratarse de derechos y garantías para una población en especial protección, preocupa que siga existiendo valores tan altos, que lejos de ser despreciables estadísticamente, representan casos de NNA que están siendo vulnerados y que no han encontrado una solución y protección efectiva. Se observa la siguiente tabla que agrupa los datos estadísticos de cumplimiento:

Tabla 4.

Porcentaje de PARD culminados, prorrogados y no culminados

Año	Culminados (%)	Prorrogados (%)	No culminados (%)
2018	90,83	8,54	0,17
2019	90,24	7	1,14
2020	89,34	8,63	0,51
2021	88,41	8,33	1,08
2022	88,24	7,52	1,96
Total	89,41%	8,004	0,972

Nota: Datos compilados por año presentados en porcentajes, sin discriminar defensorías de cada centro zonal.

En términos de eficiencia se observa que el número de casos prorrogados se ha reducido levemente, pasando de un 8,6% en 2020, a 8,33% en 2021 y llegando a un 7,52% en 2022, representando una reducción cercana a un 1% total en los últimos 3 años analizados. Sin embargo, respecto a los casos no culminados la tendencia ha sido contraria, pasado de un 0,5% en 2020 a un 1,9% en 2022, lo que supuso un aumento de los problemas de terminación de los PARD dentro de los términos de la Ley 1878 de 2018.

Esto dejaría entrever que los casos prorrogados tuvieron una leve disminución, pero los casos no culminados y que tuvieron que pasar a una estancia judicial se aumentaron durante los últimos 3 años. No obstante, se resalta que para

2018 y 2019 el volumen de PARD recibidos fue considerablemente mayor a los presentados en los 3 años posteriores con el mismo porcentaje de prórroga o no culminación. Se entiende así que la eficiencia no mejoró respecto a los tiempos para culminar un proceso, pero los PARD que sí lograron culminarse por completo respetaron en el 90% de los casos estos tiempos reglamentarios.

En total, 19 casos en 5 años no pudieron resolverse en los primeros dieciocho (18) meses y tuvieron que pasar a una instancia judicial que pudiera reestablecer sus derechos y proteger a los NNA involucrados. Y cerca de 207 casos necesitaron utilizar la prórroga establecida en el art. 103 de la Ley 1098 de 2006 modificada por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018. En total, implicaría esto que de los 226 casos que no se culminaron en el tiempo inicial y tuvieron que ser prorrogados, cerca del 8,4% no logró culminarse.

Ahora, se requiere señalar que lo planteado por Barrios Zabaleta et al., (2020); Cardona Romero, (2022) y Valencia y Espinosa, (2023), sobre los objetivos y principios del PARD resultan enfocándose en el interés superior del niño, la eficacia y celeridad y el enfoque restaurativo. En esa medida, el interés superior implica que, pese a ser valores inferiores al 10%, sigue representado cerca de 200 casos que no ha velado de manera idónea por este interés superior, dado que en lugar de reducirse año a año para mejorar los PARD, estos han reflejado casi los mismos porcentajes.

De igual manera, al analizar la celeridad propia de estos procesos, se llega a la misma conclusión respecto a que se ha incumplido con esta en al menos el 10% de los casos año a año, durante el periodo revisado. Por tanto, si bien la Ley 1878 de 2018 preceptúa unos tiempos expeditos para salvaguardar y proteger los derechos de los NNA, existe un porcentaje alto que no logra solucionar estos problemas y adversidades dentro de los primeros seis (6) meses, sumado a un segundo porcentaje igualmente considerable de casos que, en relación con el volumen de PARD recibidos, debería ser menor. Se colige que, tomando como principio el restablecimiento de derechos, puede considerarse que en el 10% de los

casos este restablecimiento no se hace en los primeros seis (6) meses y cerca de un 2% toma más de dieciocho (18) meses pasar a una instancia judicial, implicando una carga mayor para el NNA que está en situación de vulnerabilidad.

3.2. Sobre los retos y dificultades que pueden presentarse

Entendiendo que existe una dificultad en la atención efectiva, célere y eficiente de los PARD en Neiva dentro de sus dos Centro Zonales, se hace preciso revisar los posibles retos y dificultades por la que se atraviesan. Es así como siguiendo lo planteado por fuentes doctrinales y académicos, pueden precisarse como retos y dificultades la capacidad operativa, formación y capacitación, monitoreo y evaluación.

Partiendo de la teoría y evidencia empírica, se observa que la teoría de recursos humanos en la administración pública y administrativa resalta la importancia de tener suficiente personal capacitado para cada una de las funciones que deben cumplir dentro de los procesos desplegados (Alexander, 1979). Desde esta teoría y aplicado al campo de los PARD en Neiva, se tiene que la capacidad de generar procesos idóneos u eficientes requiere de un equipo profesional bien capacitado, en una relación de cantidad e idoneidad.

Sobre la información recaba desde el ICBF en la cual se informa que cada defensoría cuenta con un equipo integrado por un cuerpo profesional de al menos cuatro (4) personas, según la Ley 1878 de 2018, es posible identificar que este número puede no ser suficiente para cumplir con las funciones y necesidades de los PARD. La cantidad de casos que debe manejar cada defensoría de familia puede sobrepasar la capacidad del cuerpo profesional, generando agotamiento y dificultad para cumplir con los tiempos establecidos para los PARD. Asimismo, y bajo la lógica de Alexander (1979), puede presentarse una falta de capacitación a la persona que tiende este tipo de procesos, porque la disminución de los casos en los últimos tres años sumado al porcentaje de casos no culminados, podría señalar una ausencia de capacitación para manejar el volumen actual de PARD en cada defensoría.

En términos de impacto, y siguiendo la idea Rodríguez y Frascica (2015), se tiene que estos problemas serán consecuentes con retrasos en la resolución de casos, dado que la ausencia de persona llevaría a demoras significativas en los PARD afectando, a su vez, a los NNA que requieren de la protección de la entidad. La calidad del servicio prestado, en términos de un personal que no esté debidamente capacitado, puede comprometer la idoneidad del resultado final en el proceso administrativo, resultado en decisiones inadecuadas.

Ahora, respecto al monitoreo y evaluación, dentro de los principios básicos de la normativa se destaca la necesidad del seguimiento desde el enfoque de gestión basado en resultados, el cual enfatiza la necesidad de que el monitoreo y la evaluación sean constantes con el fin de mejorar el rendimiento organizacional y asegurar que los objetivos institucionales sean cumplidos (Rodríguez et al., 2021). Se presentan así el desafío para el mejoramiento de los PARD, en donde se requieren de sistemas de monitoreo eficientes, dado que una ausencia de sistemas efectivos para evaluar el progreso de los casos puede dificultar la identificación de cuellos de botella y áreas de mejora, como los que se presentan a partir de 2020 a 2022, en relación con los casos no culminados.

3.3. Sobre las recomendaciones aplicables a los PARD en Neiva

En relación con las recomendaciones, identificados los retos y yerros, resulta importante implementar estrategias que puedan mejorar y reducir los PARD no culminados y prorrogados. Principalmente, se deben fortalecer las capacidades operativas del ICBF, incrementando el personal y los recursos humanos como defensores de familia, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de apoyo.

Si bien el volumen de PARD a los largo de los años ha sido menor comparado con 2018 y 2019, no se observa la misma reducción en los tiempos, por lo que se debe mejorar la eficiencia general del proceso, centrado en los NNA y no los resultados institucionales finales (Vedia, 2021). De igual manera, se precisa de una

distribución más equitativa de casos dado que, en algunos momentos algunas defensorías se ven más saturadas de PARD que otras, lo que puede llevar a falencias en los restablecimientos administrativos para con los NNA.

Con respecto a lo anterior, se entiende desde Rodríguez et al., (2021) que es necesario una formación continua y capacitación constante del personal, ya que este proceso continuo de mejora y capacitación al personal debe enfocarse en las mejores prácticas en la atención y protección de los derechos de los menores, así como en el manejo de casos complejos. Además, la norma base del 2006 ha tenido modificaciones como la presentada por la Ley 1878 de 2018 y existen otras modificaciones e interpretaciones jurisprudenciales que plantean la necesidad mantener a los funcionarios actualizados sobre los cambios en la legislación y las políticas relevantes, dado que el ámbito de la protección de menores está en constante cambio y ajuste a las realidades sociales.

Por último, resulta importante que se cuente con sistemas de monitoreo y seguimiento a los casos que involucre otros factores y elementos propicios para una evaluación mucho más integral de los PARD y aseguren que se cumplan los plazos para identificar rápidamente cualquier problema durante el proceso y que la toma de decisiones sea célere, expedita y pertinente. Aunado a lo anterior y siguiendo la línea Forero Rengifo, (2023) un monitoreo y evaluación constante no solo mejora la transparencia y la rendición de cuentas desde una mirada institucional, sino que aporta datos valiosos para realizar ajustes y mejoras continuas en los procesos administrativos centrados en los restablecimientos de derechos de los NNA vulnerados.

Conclusiones

Se concluye desde la revisión normativa que la Ley 1878 de 2018 la existencia de un avance considerable en la protección de los NNA que han sido vulnerados. Se observa así que la Ley modificatoria del Código de Infancia y Adolescencia establecer criterios de celeridad, eficiencia, integridad y, sobre todo, centra el proceso en el NNA y no en el castigo hacia el actor que vulnera al menor. De allí que, desde el análisis exegético, que el marco normativo colombiano está adecuándose a las necesidades contemporáneas para garantizar una protección más eficiente de los derechos de los NNA mediante procesos administrativos mejorados.

La normativa también permite concluir que se aboga por un fortalecimiento de los mecanismos de intervención y atención y subraya la importancia de la participación de los NNA en las decisiones posteriores que los afectan. De igual manera, dentro de los principios extraídos de la revisión dogmática y normativa, se observa una atención más cuidadosa hacia la capacidad institucional y coordinación efectiva entre las entidades responsables, todo ello con el fin de asegurar que el proceso gire en torno a los derechos de los NNA vulnerados y que lo mismos sean efectivamente restaurados.

Desde un enfoque estadístico, se halla que durante los años 2018 a 2022, los Centros Zonales de Neiva y La Gaitana mostraron una tendencia fluctuante de PARD recibidos, prorrogados y no culminados. Así, se observa que en Neiva existió una reducción significativa de 568 casos en 2018 a 120 en 2020, estabilizándose en 156 para 2021 y 2022. La Gaitana también mostró una reducción, pero más pronunciada, con 206 casos para 2018 a 56 en 2020 y 114 en 2022. Desde esta análisis, podría colegirse una variación y fluctuación en la capacidad de respuesta y la incidencia de otros factores que afectan el proceso.

Sin embargo, desde un enfoque centrado en el menor existe un rango de mejora en el cumplimiento de los términos legales. Al revisar y sistematizar los datos

recabados, se obtiene que los PARD prorrogados dentro del términos legales de la Ley 1878 de 2018 oscilan entre el 10% del total, y los casos no culminados llegan al 2% en el 2022. Así, durante el periodo 2018-2022, el Centro Zonal de Neiva no resolvió en tiempo 15 casos, y el centro Zonal La Gaitana no resolvió 4. Se refleja un tasa de incumplimiento total del 1,48% para Neiva y un 0,37% para La Gaitana. En términos estadísticos podría parecer un resultado menor, pero representa situaciones críticas donde los NNA no tuvieron un restablecimiento de sus derechos en el tiempo indicado, agravando su situación manifiesta.

Por último, aunque los PARD en Neiva han alcanzado una tasa de culminación cercana al 90% entre 2018 y 2022, existen significativos desafíos operativos desde la revisión de la literatura y la causalidad de este restante 10%. Dentro de estos desafíos se resalta la insuficiencia de personal y la necesidad de una capacitación continua, pudiendo esta ser una explicación para la prórroga de aproximadamente el 10% de los casos y la judicialización de otro 2%, acotando así una necesidad de mejorar la eficiencia del sistema y asegurar una protección más efectiva y oportuna de los derechos de los NNA vulnerados.

Referencias

- Acosta Gonzalez, A. M. (2023). El principio de corresponsabilidad como garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
- Alexander, L. D. (1979). The Effect Level in the Hierarchy and Functional Area Have on the Extent Mintzberg's Roles Are Required by Managerial Jobs. *Academy of Management Proceedings*, 1979(1), 186–189.
- Barrios Zabaleta, E. P., Camargo Vidual, E. D., & Arrieta Pérez, N. R. (2020). El proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley 1878 de 2018. Estudio de casos: Centro Zonal Boston de la ciudad de Sincelejo.
- Cardona Romero, A. J. (2022). Restablecimiento y cumplimiento de derechos de los niños-niñas y adolescentes del municipio de Cabuyaro-Meta.
- Congreso de la Republica. (2006, 8 de noviembre). Ley 1098. Diario Oficial No. 46.446.
- Congreso de la Republica. (2012, 14 de mayo). Decreto 987. Diario Oficial No. 48.430.
- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (2021, 20 de mayo). Rad.11001-03-06-000-2021-00009-00(C).
- Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 44. 7 de julio 1991 (Colombia).
- De Avila, S. L., & Arcón, T. P. (2022). Maltrato institucional en Colombia. Aproximaciones a un tipo de violencia invisible contra niños, niñas y adolescentes. *Collectivus, Revista de Ciencias Sociales*, 9(2), 281–330.
- Deidenmark, E., & Karlsson, L. (2002). Programación de los derechos del niño; Cómo aplicar un Enfoque de Derechos del Niño en la Programación. *Children's Rights Programming. How to Apply a Child Rights Approach to Programming*. London: International Save the Children Alliance.

- Forero Rengifo, Y. (2023). La eficiencia de la ley 1098 de 2006 frente al restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. *Universidad Militar de Colombia*, 1(1), 56–89.
- González, J. E. M. (2021). El principio de interés superior del niño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del niño. *Revista de La Facultad de Derecho de México*, 71(280–1), 55–86.
- Hernández, A. C. (2021). Reflexiones sobre los cambios en la regulación del proceso de adopción en Colombia desde la expedición de la Ley 1878 de 2018. *Universidad Católica de Colombia*, 1(1), 1–30.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). Metodología de la investigación. 6ta Edición Sampieri. Soriano, RR (1991). Guía Para Realizar Investigaciones Sociales. Plaza y Valdés.
- Rodríguez Franco, E. J., & Frascica Escobar, Y. E. (2015). Las voces de los niños en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. *Revista de La Universidad de La Salle*, 2015(67), 123–135.
- Rodríguez, G. M. Z., Pincay, D. E. Á., & Rodríguez, N. R. Y. (2021). La importancia de la auditoría de gestión y los procesos administrativos y técnicos, realidades y perspectivas. UNESUM-Ciencias. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 5(3), 127–140.
- Sampieri, R. H. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill México.
- Sarmiento Morales, V. A. (2020). Programas de prevención del Maltrato Infantil en niños, niñas y adolescentes en Colombia.
- Sierra, A. Á., & Gúiza, E. Y. N. (2020). Eficiencia de la Ley 1098 de 2006 a partir de sus modificaciones a los términos del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). *Nueva Época*, 55, 11–30.

- Valencia, I. C. L., & Espinosa, J. D. C. V. (2023). Estado del Arte: Representaciones Sociales de la Ley 1098 De 2006; Marco Legal para la Protección Integral de los Derechos de los Niños y Niñas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 5973–5986.
- Vedia, F. H. O. (2021). La autonomía progresiva, el principio del interés superior del niño y su derecho a ser oído a partir de su reconocimiento como sujeto de derecho. *Revista de Derecho de La UCB*, 5(8), 133–170.
- Villamizar Jaraba, M., Pérez Martínez, O. A., & Vergara Martinez, K. X. (2020). Implicaciones de la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes: mecanismos e instrumentos jurídicos de protección en Colombia: en el Municipio de Montería.